

Señores

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS ORALES DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUGA

E.

S.

D.

MEDIO DE CONTROL : DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

DEMANDANTE : JAMES CACERES MUÑOZ

DEMANDADO : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

I. DEMANDA

ALVARO RUEDA CELIS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, abogado en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en nombre y representación del soldado profesional JAMES CACERES MUÑOZ, igualmente mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N°94.475.559, conforme al poder que me ha sido conferido y en ejercicio del mecanismo de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, presento ante ustedes demanda, contra el Ministerio de Defensa Nacional, representado legalmente por el señor Ministro LUIS CARLOS VILLEGAS, o quien haga sus veces, para que por los trámites del proceso ordinario, se profiera sentencia sobre las siguientes:

II. PRETENSIONES

- 1) Se ordene la nulidad de los siguientes actos administrativos: 1. Oficio N°. OFI15-55400 MDNSGDAGPSAT del 14 de julio de 2015 mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional negó el reconocimiento de la pensión de invalidez teniendo en cuenta el subsidio familiar como partida computable. 2. Oficio N°OFI15-63920 de 13 de agosto mediante el cual el Ministerio de Defensa niega el reajuste de la pensión de invalidez de mi representado, estableciendo que al monto resultante de aplicar el porcentaje de pensión de invalidez a la asignación básica se le adicione el porcentaje de **prima de antigüedad** a que tiene derecho de conformidad a lo establecido en los artículos 16 y 18 del decreto 4433 de 2004.
- 2) Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se condene al Ministerio de Defensa Nacional a:

2.1 Ordenar el reajuste de la pensión por invalidez de mi poderdante con la inclusión de la partida de Subsidio Familiar en la misma proporción que venía percibiendo en actividad.

2.3. Igualmente como consecuencia de la anterior declaración en calidad de restablecimiento del derecho se condene al Ministerio de Defensa Nacional a liquidar la pensión de invalidez de mi poderdante estableciendo que al monto resultante de aplicar el porcentaje de pensión de invalidez a la asignación básica se le adicione el porcentaje de prima de antigüedad a que tiene derecho de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del decreto 4433 de 2004.

- 3) Ordenar el pago efectivo e indexado de los dineros que resulten de la diferencia entre los reajustes solicitados y las sumas efectivamente canceladas por concepto de asignación de retiro desde el año de reconocimiento de la asignación en adelante hasta la fecha en que sea reconocido el derecho precitado, de conformidad a lo establecido en el artículo 187 del CPACA.
- 4) Ordenar el pago de los intereses moratorios sobre los dineros provenientes del reconocimiento de la aplicación de los porcentajes mencionados en los numerales anteriores, a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, en la forma y términos señalados en el artículo 192 y 195 del CPACA.
- 5) Ordenar a la Entidad demandada el pago de gastos y costas procesales, así como las agencias en Derecho.

III. HECHOS

1. El señor JAMES CACERES MUÑOZ prestó servicio militar obligatorio en las filas del Ejército Nacional. Una vez terminado el periodo reglamentario de conformidad a lo dispuesto en el Ley 131 de 1985 fue incorporado como soldado voluntario.
2. A su vez, a partir del 01 de noviembre de 2003 por disposición administrativa del Comando del Ejército fue promovido como soldado profesional, condición que mantuvo hasta su retiro de la Fuerza.
3. Mediante Decreto 1793 de 2000, el Gobierno Nacional creó dentro de la estructura de la Fuerza Pública la modalidad de "Soldados Profesionales".
4. Mi representado sufrió una Disminución de la Capacidad Laboral al encontrarse en combate directo con el enemigo, la cual le trajo como consecuencia el retiro de la Institución Militar.
5. El Ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución N° 1661 del 26 de ABRIL de 2012, reconoció pensión por invalidez a mi representado.
6. Durante el tiempo que mi poderdante, estuvo en servicio activo como Soldado profesional en el Ejército, en razón a su matrimonio/unión marital de hecho, le fue reconocida y pagada una partida de Subsidio familiar.
7. La partida reconocida como Subsidio familiar que percibió en servicio activo le fue reconocida, liquidada y pagada en la liquidación del auxilio de cesantías.
8. En la liquidación de la pensión por invalidez de mi poderdante, el Ministerio de Defensa Nacional, no le está computando la partida de subsidio familiar, prestación que tenía reconocida, al momento de su retiro del Ejército Nacional.
9. Mi poderdante presento derecho de petición ante el Ministerio de Defensa Nacional, solicitando la inclusión como partida subsidio familiar en la liquidación de la pensión por invalidez, en el porcentaje que tenía reconocido al momento del retiro del Ejército Nacional.
10. El Ministerio de Defensa Nacional, dio respuesta al derecho de petición presentado por mi poderdante negando la inclusión de la partida subsidio familiar en la liquidación de la pensión por invalidez de mi poderdante.

11. De igual forma, el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, en el artículo 16° establece la forma de liquidación de la asignación de retiro de los soldados profesionales: el setenta por ciento (70%) del salario mensual adicionado en un treinta y ocho por ciento (38,5%), de prima de antigüedad.
12. Mi poderdante al momento de su retiro tenía reconocido como prima de antigüedad el **58,5%** de la asignación básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 16° del Decreto 4433 de 2004.
13. Con fechas 14 de JULIO de 2015 y 13 de AGOSTO de 2015 el Ministerio de Defensa Nacional dio respuesta a los derechos de petición, mediante actos administrativos N°.OFI15-55400 MDNSGDAGPSAT del 14 de JULIO de 2015 y 2. N°.OFI15-63920 MDNSGDAGPSAP DEL 13 DE AGOSTO 2015, negando las peticiones solicitadas en el derecho de petición, agotándose de esta forma la actuación administrativa.
14. Se radicó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación, previa citación al representante legal del Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de acordar acuerdo conciliatorio sobre las pretensiones aquí planteadas.
15. El 29 de OCTUBRE de 2015, ante la procuraduría Judicial 60 Judicial I para asuntos administrativos de CALI, se adelantó la diligencia de conciliación, declarándose esta fallida al no presentarse ánimo conciliatorio por parte del Ministerio de Defensa Nacional. dando así cumplimiento al requisito de procedibilidad.

IV. NORMAS VIOLADAS

Considero que con el desconocimiento del mandato constitucional y de normas legales que protegen la seguridad social, el Ministerio de Defensa Nacional ha trasgredido nuestra Constitución Política en su preámbulo y los artículos 1°, 2°, 4°, 13°, 25°, 46°, 48°, 53° y 58°. Igualmente desconoció lo contemplado en las Leyes 131 de 1985, Ley 4° de 1992, los Decretos 1793, 1794 de 2000, Ley 923 de 2004 y Decreto 4433 de 2004.

V. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

El Estado Social de Derecho consagrado y reconocido en nuestra Carta Magna, tiene dentro de sus fines esenciales garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, estableciendo de igual forma, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás **derechos**.

Con la expedición de los actos administrativos que se acusan en su legalidad, no se ha garantizado ese fin primordial Constitucional, toda vez que la administración no estudió la petición teniendo en cuenta los postulados Constitucionales y legales establecidos para los soldados profesionales. Por tales razones imputamos como causal o vicio de nulidad de los actos administrativos demandados: **LA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN y A LA LEY, así como la FALSA MOTIVACION,**

toda vez que no existe correspondencia entre la decisión adoptada y los motivos de hecho y de derecho que se aducen para negar a mi poderdante las peticiones solicitadas.

I. GÉNESIS DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES, SU RÉGIMEN PRESTACIONAL y DERECHOS RECLAMADOS

El Gobierno Nacional con el propósito de enfrentar a la guerrilla que por varias décadas ha generado altos niveles de violencia en todo el territorio nacional, vio la necesidad de contar con un Ejército profesional altamente entrenado en operaciones contrainsurgentes como una de las estrategias tendientes a neutralizar y destruir a estos grupos criminales; por ello mediante el Decreto 1793 de 2000 se creó la modalidad de soldados profesionales, cuerpo conformado por los antiguos soldados voluntarios que manifestaron su deseo de continuar laborando en las Fuerzas Militares, hombres capacitados y entrenados en operaciones contrainsurgentes.

Señor Juez, el Presidente de la República en ejercicio de su labor reglamentaria, al expedir el decreto reglamentario 1794 de 2000, creó la posibilidad para que los soldados voluntarios de las Fuerzas Militares, pudieran ingresar a la nueva figura conocida como soldados profesionales y a manera de motivación se les garantizó que continuarían percibiendo el mismo monto como asignación básica mensual¹. Creando así bajo este supuesto, un derecho de tipo personalísimo de orden patrimonial que queda incorporado en la mesada del pensionado.

Frente al reconocimiento que debe hacer el Ministerio de Defensa Nacional al tener en cuenta el **subsidio familiar** como partida computable al momento de liquidar la pensión por invalidez de mí representado, no debe desconocerse que históricamente el subsidio familiar fue instituido para beneficiar a los sectores menos favorecidos salarialmente, así como se reconoce en varios pronunciamientos de diferentes estamentos judiciales cuando han fallado casos similares a la presente Litis:

"Se tiene entonces que históricamente el subsidio familiar fue instituido para beneficiar a los sectores menos favorecidos salarialmente, estableciéndose un sistema de compensación entre los salarios altos y bajos, con el fin de permitirle a los más pobres cubrir la carga económica que representa el sostenimiento de la familia."²

Si bien es cierto que el Gobierno Nacional al proferir el Decreto 4433 de 2004, no incluyó dentro de la liquidación de la asignación de retiro el subsidio familiar para los soldados profesionales, como si lo hizo para otros miembros de las fuerzas militares. Tal circunstancia, no limita a que muchos soldados gocen del subsidio familiar por ser un derecho adquirido.

La no inclusión del subsidio familiar como partida computable en la liquidación de la prima por invalidez, es contrario a los principios establecidos en la Ley 923 de 2004,

¹ La asignación de retiro es el porcentaje mensual de dinero que reciben los funcionarios retirados de la fuerza pública, a partir del momento en que han cumplido con el período mínimo de permanencia dentro de la respectiva institución. En el caso que nos ocupa, mí representado por haber sido lesionado protegiendo la soberanía nacional fue objeto de una disminución de la capacidad psicofísica que le produjo su retiro de la Institución Militar por concepto de "PENSIÓN DE INVALIDEZ"

² Tribunal Administrativo de Sucre, Exp: 2013-013

Ley mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 19, literal e de la Constitución Política, que en su artículo 2º, prevé:

“ARTÍCULO 2º OBJETIVOS Y CRITERIOS. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos:

2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos los derechos adquiridos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de la misma.”

ARTÍCULO 5º. LÍMITES LEGALES. Todo régimen pensional y/o de asignación de retiro del personal de la Fuerza Pública, que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.”

Así las cosas, el párrafo del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, viola el principio Constitucional de igualdad, así como los principios rectores consagrados en la Ley 923 de 2004, en el asunto de la referencia, ya que con respecto a los soldados e infantes de marina que tengan el derecho adquirido del subsidio familiar, este debe ser una partida computable para calcular su pensión por invalidez. Por las anteriores razones solicito se **inaplique por inconstitucional e ilegal para el caso en concreto, el párrafo 13 del Decreto 4433 de 2004, por violar el principio Constitucional de igualdad, así como, los principios rectores consagrados en la Ley 923 de 2004.**

De igual forma, el legislador promulgó la ley 923 del 2004 en la cual se les reconoce a los soldados profesionales el derecho a acceder previo los requisitos que se establezcan a una asignación de retiro –pensión por invalidez– en el caso en el que tenga derecho debido a la disminución de la capacidad laboral.

Y en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 se dejó consignada la forma como se debe hacer la liquidación de las asignaciones de retiro (pensión por invalidez) de los soldados profesionales, así:

“Artículo 16. *Asignación de retiro para soldados profesionales.* Los soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Como se desprende de la lectura del artículo anteriormente transcrito, el liquidador debe en primera instancia tratándose de pensiones de invalidez: Aplicar el porcentaje de disminución de capacidad laboral al salario básico y el porcentaje

reconocido (38.5%- porcentaje que varía de conformidad al tiempo de servicio laborado) de prima de antigüedad se obtendrá del sueldo básico estos dos resultados sumados son la pensión a pagar.

El Ministerio de Defensa Nacional desde el reconocimiento de la Pensión de mi poderdante, viene liquidando la prima de antigüedad de la siguiente forma: del salario básico le aplica el porcentaje reconocido de prima de antigüedad previsto en el artículo 2° del Decreto 1794 del 2000 (58.5%- porcentaje que varía de conformidad al tiempo de servicio laborado), a este resultado le aplican el porcentaje según el artículo 18 del Decreto 4433 (38.5%- porcentaje que varía de conformidad al tiempo de servicio laborado). El resultado de lo anterior, es lo que reconoce como prima de antigüedad. Ahora el Ministerio de Defensa Nacional toma el salario básico le suma la prima de antigüedad de la forma como anteriormente se referencio su liquidación y al resultado, le aplica el porcentaje de disminución de capacidad laboral, que para el efecto que nos ocupa consiste en el 56.55%, este valor es el reconocido como pensión por invalidez.

LIQUIDACIÓN ACTUAL CON LA INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTICULO 16 DEL DECRETO 4433 DEL 2004	
SUELDO BASICO 40%	\$ 965.236
PRIMA DE ANTIGÜEDAD 43.20 %	\$ 416.982
45.5% DEL 43.20%	\$ 189.727
SUBTOTAL	\$ 1.154.962
PENSION DE INVALIDEZ 50 %	\$ 577.481

La anterior forma de liquidación es **desacertada** en el entendido de que cada porcentaje debe ser extraído del salario básico y no de la sumatoria del salario básico más la suma de la prima de antigüedad como se realiza por parte del Ministerio de Defensa. Pues la liquidación debe hacerse de la siguiente manera:

En el siguiente cuadro se presenta la liquidación de la pensión por invalidez con la debida aplicación de los establecido en el artículo 16° del decreto 4433 de 2004.

LIQUIDACIÓN CON LA APLICACIÓN CORRECTA DEL ARTÍCULO 16° DEL DECRETO 4433 DE 2004.	
SUELDO BASICO 40%	\$ 965.236
50 % DEL SUELDO BASICO	\$ 482.618
PRIMA DE ANTIGÜEDAD 45.5 %	\$ 219.591
VALOR DE LA PENSIÓN	\$ 941.105

Señor Juez, como se puede observar del análisis de los anteriores cuadros la forma en que el Ministerio de Defensa Nacional está liquidando la pensión por invalidez de mi poderdante es violatoria a lo dispuesto por el legislador en el artículo 16 del decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004.

En virtud a lo anterior se puede colegir, que el flagrante desconocimiento de los derechos peticionados por mi poderdante, ha generado una vulneración por parte del Ministerio de Defensa Nacional a normas **Constitucionales y Legales**, violación que se intensifica al tratarse el peticionario de un **DISMINUIDO FÍSICO**, que requiere una protección reforzada por parte de las entidades Estatales.

II. PROTECCIÓN ESPECIAL AL DISMINUIDO FÍSICO O PSÍQUICO

Ahora, es menester afirmar que en el caso que nos ocupa nos encontramos frente a un reconocimiento especial, como lo es la **PENSIÓN POR INVALIDEZ**³, la cual se obtiene como contraprestación económica al haberse generado una disminución de la capacidad laboral de conformidad a lo establecido en la Ley y que conlleve la desvinculación de la Institución Militar. Por lo tanto el personal retirado bajo esta causal "Disminución de la Capacidad Laboral" siempre y cuando ostente un porcentaje de pérdida de capacidad laboral establecido en la Ley, obtiene un reconocimiento de una pensión de por invalidez.

Su señoría, mi representado obtuvo la lesión física en desarrollo de la prestación del servicio por acción directa del enemigo en combate, defendiendo nuestra patria de los grupos insurgentes de la Ley, **quedando como disminuido físico**, condición especial que exige un amparo y protección reforzada por parte de la Instituciones Estatales, según lo contemplado Constitucionalmente.⁴

Sin embargo, dichas Instituciones Estatales, esto es el Ministerio de Defensa Nacional al disminuirles el monto de la pensión de invalidez - al negarse el reconocimiento de las pretensiones de esta demanda en las peticiones realizadas ante la administración- a los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios, los cuales debido a la confrontación con grupos insurgentes, sufren lesiones personales que les generaron disminución de la capacidad laboral, y al no ser aptos para el servicio son retirados de la Institución Militar, contravienen de manera directa principios fundamentales propios de un Estado Constitucional de Derecho, el cual tiene como premisa fundamental la obediencia a las normas con el respeto por la dignidad humana, el mínimo vital, los derechos adquiridos, la salud, la seguridad social entre otros.

La Corte Constitucional frente a los derechos y la protección que les asiste a los discapacitados ha manifestado:

"Los discapacitados constituyen un sector tradicionalmente marginado de la sociedad, aun cuando la discriminación que padecen presenta características diferentes a la que sufren otros conglomerados sociales. La situación de segregación de los discapacitados ha sido objeto de cuestionamientos apenas en las últimas décadas. Sin embargo, como resultado de ello ha surgido la convicción acerca de la necesidad de modificar la percepción sobre los discapacitados y su relación con la sociedad. Por lo tanto, se ha impuesto el concepto de que los Estados y las sociedades deben impulsar su integración para que éstos puedan ejercer sus derechos y asumir responsabilidades. En este sentido se han dictado distintas declaraciones internacionales y, en el caso colombiano, se han expedido algunas leyes que favorecen y respaldan un tratamiento preferencial a estas personas, a través de medidas de diferenciación positiva"⁵.

³ "PENSIÓN DE INVALIDEZ-Finalidad: La garantía a la seguridad social y su fundamentalidad está muy ligada a la satisfacción real de los derechos humanos, especialmente el de la dignidad humana, pues a través de este derecho puede afrontarse la lucha contra los índices de pobreza y miseria. De manera especial, con la protección de esta garantía en las hipótesis de invalidez se busca evitar los efectos negativos que emanan de la falta de recursos económicos para cubrir aspectos básicos como la salud y el sostenimiento del hogar, debido a la imposibilidad del trabajador de seguir desempeñándose en el mercado laboral". Sentencia T-146/13

⁴ Artículo 47 Constitución Nacional.

⁵ T-207/99 MP. Eduardo Cifuentes

En el caso que nos ocupa el Ministerio de Defensa Nacional, adolece del trato protector y garantista que debe dar a los **disminuidos físicos o psíquicos**, aunado a lo anterior tratándose de la escala menos favorecida dentro de la estructura militar, como lo son los SOLDADOS, tal y como la Corte Constitucional lo ha reconocido:

"SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Persona con discapacidad o con alguna enfermedad grave, especial situación de los miembros de la Fuerza Pública

La Constitución Política, la Corte Constitucional y los Organismos Internacionales han sido reiterativos en la obligación del Estado de proteger a aquellas personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, como es el caso de las personas con discapacidad; así mismo, han señalado la importancia de resguardar su derecho fundamental a la seguridad social y acoger medidas de orden positivo orientadas a que puedan superar la situación de desigualdad y de desprotección a la que ellas se ven sometidas. **Protección que se refuerza cuando es un miembro de la Fuerza Pública, cuya discapacidad sea producto de lesiones sufridas en virtud del cumplimiento de su deber**⁶ (Negrilla propia)

Por último, la Corte Constitucional ha manifestado en sentencia T-131 de 2008 que ésta protección adquiere un matiz particular, cuando la persona afectada en sus condiciones de salud es un agente o servidor del Estado, que en cumplimiento de sus funciones o con ocasión de las mismas, ha sufrido una considerable disminución en sus condiciones físicas, psíquicas y sensoriales. Así lo consideró la Sentencia T-1197 de 2001, en la cual se dijo:

"Es el caso de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, personas que por la naturaleza de sus funciones y debido a las actividades que diariamente ejecutan, afrontan riesgos permanentes para su vida e integridad personal y que frecuentemente sufren lesiones severas, en muchos casos irreversibles. La sociedad y el Estado tienen entonces un compromiso particular, pues se trata de garantizar y prestar el servicio de seguridad social, a quienes de manera directa actúan para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades".

En resumen, la Constitución Política, la Corte Constitucional y los Organismos Internacionales han sido reiterativos en la obligación del Estado de proteger a aquellas personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, como es el caso de las personas con discapacidad; así mismo, han señalado la importancia de resguardar su derecho fundamental a la seguridad social y acoger medidas de orden positivo orientadas a que puedan superar la situación de desigualdad y de desprotección a la que ellas se ven sometidas. Protección que se refuerza cuando es un miembro de la Fuerza Pública, cuya discapacidad sea producto de lesiones sufridas en virtud del cumplimiento de su deber.

Por lo tanto, estos trabajadores que gracias a su compromiso con el servicio y defendiendo la nación sufrieron una disminución de su capacidad laboral, la cual no les permite continuar laborando en las Fuerzas Militares, adolecen hoy en día de un tratamiento preferencial al encontrarse en una situación de debilidad manifiesta.

Por lo tanto, el Ministerio de Defensa Nacional al descocer los derechos de mi representado y no reconocer la liquidación de su Pensión por INVALIDEZ, teniendo en cuenta un salario mínimo incrementado en el 60% del mismo salario, y no liquidando en debida forma la prima de antigüedad como partida computable de la pensión por invalidez, vulnera directamente la **Constitución y la Ley** desconociendo además de los postulados ya citados, otros como lo son:

⁶ Ibidem

A. Principio de no discriminación y Derecho a la Igualdad

Una de las garantías Constitucionales sobre las cuales se funda nuestro Estado Social de Derecho, es precisamente el derecho a la igualdad, ya que está constituido precisamente por el deber del Estado de promover condiciones para lograr la igualdad real y efectiva, tales como son, la posibilidad de conceder ventajas a grupos disminuidos o marginados y una especial protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Es así como el artículo 13 de la Carta Política establece:

"El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ella se cometan".

El derecho a la igualdad es uno de los principios fundantes del constitucionalismo moderno que incidió de manera directa en la estructuración del derecho laboral, el cual encuentra su sustento en los artículos 13 y 53 de la Constitución y en los convenios 95 y 111 de la OIT. De esta manera y en nuestro sentir, la reafirmación del principio y derecho fundamental de igualdad ante la ley, tiene por objeto materializar en forma progresiva las condiciones sociales, económicas y culturales que reduzcan al máximo los desequilibrios existentes en las oportunidades del desarrollo humano, en especial por las condiciones de vida pretendidas por los trabajadores con relación a las expectativas que desarrollan en sus actividades laborales.

Es por ello que cuando el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL mediante los actos administrativos objeto de estudio, niega la liquidación de la pensión de invalidez de mi poderdante tomando como asignación básica un salario mínimo incrementado en un 60% fijada en inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, para los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios, omite el mandato constitucional⁷ y legal que indica la obligatoriedad de tener en cuenta para determinar la mesada pensional los ingresos percibidos por el trabajador, comportamiento que no obedece un actuar razonable por parte de la administración, generando con ello un trato discriminatorio y desigual que desvirtúa la adecuada aplicación de la Constitución Política con referencia al principio fundamental de la igualdad.

Evidenciamos que en el tema de la liquidación de las pensiones de invalidez de los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios tomando como base de liquidación una asignación por debajo de la establecida en los decretos reglamentarios al que tiene derecho, se le está dando un tratamiento discriminatorio a mi poderdante, en abierta contradicción con el artículo 13° de la Carta Política, toda vez que en este sistema, no existe justificación alguna que legitime a la administración estatal omitir los principios del comentado Estado Social de Derecho, que amerite la aplicación de un trato diferenciador que desmejore las condiciones del personal de la fuerza pública, siendo que existe la premisa constitucional de un trato igualitario y equiparado a todos los pensionados de Colombia.

De esta forma, cuando se está ante la aplicación de un régimen pensional que cobija a los integrantes de la fuerza pública, dándole tratamiento discriminatorio a

⁷Corte Constitucional, sentencia T/ 631 de 2002.

los soldados profesionales respecto de los demás integrantes, ya que de conformidad con los decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, oficiales, suboficiales y agentes de policía se les liquida la asignación de retiro tomando como base de liquidación el último salario; a los soldados profesionales que ingresaron al servicio del Ejército Nacional antes del 31 de diciembre de 2000, se les toma como base de liquidación una asignación de menor valor, afectando con ello su mínimo vital y su patrimonio, lo que tienden al desconocimiento del derecho a la igualdad, cuando se otorga un trato diferente a las personas que se encuentran en la misma situación de hecho referente a los derechos pensionales.

El legislador en la ley 923 de 2004, "Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política" en el artículo segundo dejaron claramente consignadas las facultades que mediante esta Ley Marco podía el Ejecutivo reglamentar el sistema de pensiones de este grupo de personas.

El artículo 2° de la ley 932 se consignó:

"Artículo 2°. *Objetivos y criterios.* Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios (negrilla y subrayado es nuestro)

2.7. **No podrá discriminarse por razón de categoría, jerarquía** o cualquier otra condición a los miembros de la Fuerza Pública para efectos de adelantar el trámite administrativo del reconocimiento de una asignación de retiro o pensión o sustitución". (Negrilla y subrayado es nuestro)

Señor Juez como se puede observar de la transcripción anterior de los fundamentos establecidos en la ley marco de pensiones aplicable a la Fuerza Pública, el legislador dejó claro que cuando se reglamentara la Ley, ésta no podía desconocer el derecho a la igualdad.

La Constitución Colombiana ha establecido como fundamentos propios del Estado Social de Derecho, la igualdad material como formal en todos los ámbitos de la vida social, ARTÍCULO 13 Derecho a la Igualdad⁸. Este postulado establece el derecho a la igualdad ante la Ley (igualdad formal) y, a título enunciativo, contempla unos criterios que pueden generar desigualdades injustificadas (sexo, raza, origen, etc.), e impone al Estado la obligación de proteger a las personas que pueden ser objeto de discriminaciones por razón de su condición económica, física o mental (igualdad material). Tan es así que en personas de debilidad manifiesta⁹ es una obligación del Estado brindar un trato diferencial y positivo, y en consecuencia, el trato desigual no solo es válido sino necesario para realizar los fines de un Estado Social de Derecho.

⁸ "Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".

⁹ Tal es el caso de las personas en condición de desplazamiento, aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, las mujeres en estado de embarazo, los ancianos, las minorías étnicas y raciales, entre otros.

El artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, establece un trato diferenciado, al incluir el subsidio familiar en la liquidación de los Oficiales y Suboficiales, empero, no la incluyó para los Soldados Profesionales, sin que se vislumbre justificación razonable para tal exclusión. Más aún cuando se debe tener en cuenta que la finalidad de dicho subsidio es ayudar al trabajador al sostenimiento de las personas que se encuentran a su cargo en consideración a sus ingresos, resultando desproporcionado y en consecuencia inconstitucional que se haya previsto dicha partida para Oficiales y Suboficiales que se encuentran en un rango salarial más alto que los Soldados Profesionales.

El Consejo de Estado en decisión de la MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez, en providencia de fecha 17 de octubre de 2013, Expediente: 20130182100, sobre el tema en específico manifestó:

“Así pues, a la luz de la Carta Política y los postulados del Estado Social de Derecho, resulta inaceptable que el Decreto 4433 de 2004 haya previsto el subsidio familiar como partida computable para los miembros de la Fuerza Pública que tienen una mejor categoría – los Oficiales y Suboficiales- dejando por fuera a los que devengan un salario inferior y en consecuencia, a quienes más lo necesitan, los soldados profesionales”.

Por las anteriores consideraciones y en vigencia del derecho fundamental a la igualdad se solicita al despacho, que ordene al Ministerio de Defensa Nacional a liquidar la pensión de invalidez de mi poderdante tomando como base de liquidación la asignación mensual establecida en el inciso segundo del artículo primero del decreto 1794 de 2000, así mismo se ordene la correcta liquidación de la prima de antigüedad.

B. Los Derechos Adquiridos

La Corte Constitucional ha sido enfática en la construcción de línea jurisprudencial, en la cual se ha establecido que los cambios en la ley laboral se aplican a las relaciones de trabajo vigentes, independientemente de si son favorables o desfavorables para los intereses del trabajador, siempre y cuando el trabajador no tenga ya un derecho adquirido a que se aplique la anterior normatividad, por cuanto ya había reunido los requisitos necesarios para poder acceder al derecho cuya reglamentación fue modificada; en la misma medida, la Corte ha establecido que cuando un trabajador ya cumplió con los requisitos necesarios para poder acceder a un derecho, las nuevas leyes laborales que modifiquen los requisitos para acceder a ese derecho no le pueden ser aplicados.

En la Sentencia C-781 de 2003 la Corte Constitucional, corroboró su jurisprudencia sobre la diferencia que existe entre los derechos adquiridos y las meras expectativas, resaltando que el legislador a bien tiene modificar las normas laborales, sin más límites que los que le impongan la Constitución y los derechos fundamentales de las personas.

La Corte ha establecido:

“(…) el artículo 53 del Ordenamiento Superior dispone que la ley no puede menoscabar los derechos de los trabajadores. Y en el mismo sentido se orienta el artículo 58 ibídem al señalar que *“se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por*

leyes posteriores". De modo que una vez se ha consumado la situación jurídica e individual, y constituido así el derecho concreto, los derechos laborales entran al patrimonio de la persona y son intangibles frente a la nueva legislación.

Sobre la intangibilidad de los derechos adquiridos la Corte ha expresado:

'Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. Ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la protección del orden social, la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales. De este modo se construye el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes frente a aquélla, cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes' (Subrayado fuera de texto).

Así mismo, la Corte ha manifestado que el principio de irretroactividad de la ley no opera respecto de las meras expectativas:

*'La noción de derecho adquirido ha sido ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las meras expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las leyes ulteriores, por el contrario las segundas no gozan de esa protección. Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho. A su vez, esta prohibición de la retroactividad es consustancial a la idea misma del derecho en una sociedad democrática, pues la regulación social a través de normas jurídicas pretende dirigir la conducta de personas libres, por lo cual es necesario que los individuos conozcan previamente las normas para que puedan adecuar sus comportamientos a las mismas. Una aplicación retroactiva de una ley rompe entonces no sólo la confianza de las personas en el derecho, con lo cual se afecta la buena fe sino que, además, desconoce la libertad y autonomía de los destinatarios de las normas, con lo cual se vulnera su dignidad'*¹⁰. (Subrayado fuera de texto).

Por lo establecido en la Jurisprudencia Constitucional, podremos afirmar que la Ley no puede afectar una situación jurídica concreta y consolidada, que ha permitido que un derecho ingrese al patrimonio de una persona, por haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para el nacimiento del derecho.

Con sustento en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia anteriormente reseñado y de acuerdo a una interpretación conjunta y sistemática de los mandatos constitucionales expresados en los artículos 48 y 53, nuestra carta suprema de derechos le garantiza a cualquier ciudadano la protección inmediata y el reconocimiento de los derechos adquiridos de cualquier índole, mucho más si todas estas prerrogativas extienden su campo de aplicación a temas relacionados con el derecho, como lo es de contar con una seguridad social progresiva, eficiente y universal, que haga eficaz el hecho en que cuando se adquieran ciertas potestades a nivel laboral, éstas mismas sean respetadas y no puedan ser desmejoradas con fundamento en la progresividad y en la prohibición de regresividad amparadas por nuestro Estado.

Es así como nuestra Constitución Política, prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales o con la aplicación de una norma que desconozca las garantías adquiridas que impliquen un retroceso o

¹⁰ C-781 de 2003

desmejoramiento que omita la interpretación de la norma más favorable de acuerdo al principio ya explicado del *In dubio pro operario*.

En sentencia C-242 de 2009, magistrado ponente Dr. Mauricio González Cuervo, la Corte Constitucional reiteró que los *derechos adquiridos* son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una Ley y, que por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley. Existe un derecho adquirido cuando respecto de un determinado sujeto, los hechos descritos en las premisas normativas tienen debido cumplimiento. Por contraste, las *meras expectativas*, consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador con sujeción a parámetros de justicia y de equidad.

Esta corporación en su jurisprudencia, durante la elaboración del concepto de derechos adquiridos, los definió como aquellos beneficios que han ingresado definitivamente al patrimonio de una persona; esto implica que un derecho se ha adquirido cuando quien lo reclama, bien ha acreditado el cumplimiento de los requisitos descritos en el ordenamiento¹¹, que al tenor del artículo 58 la Carta Política, no podrán ser desconocidos ya que comprenden una situación jurídica consolidada tras el cumplimiento de ciertos requisitos fácticos, lo que les confiere el carácter de intangibles¹².

Así las cosas, y retomando la Litis que nos ocupa, esto es el caso de los **soldados profesionales que se encontraban activos en la fuerza para el 31 de diciembre de 2000**, no se les podrá desconocer los derechos adquiridos y consolidados a su favor, toda vez que así mismo lo consigna el Decreto 1794 de 2000 en su literal segundo: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%)".

Por lo anterior, su señoría y en virtud al respeto que se debe dar a los derechos adquiridos, solicito a usted conceder bajo este principio las pretensiones de la demanda, por lo tanto se ordene la reliquidación de la pensión por invalidez de conformidad a lo solicitado.

C. EL MÍNIMO VITAL

El concepto de Mínimo vital de subsistencia debe ser evaluado desde la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo, verificándose que quien alega su vulneración tenga las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad humana¹³.

Es así como el derecho al mínimo vital ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional como un aspecto de naturaleza fundamental relacionado con la

¹¹C-038 de 2004 M.P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.

¹²Sentencia C-584 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

¹³T-581A/11

dignidad humana y que es especialmente relevante cuando su titular es una persona que requiera de protección especial. Al respecto ha dicho la jurisprudencia que:

“El principio constitucional de dignidad humana, sobre el que se establece el Estado social de derecho sirve de fundamento al derecho al mínimo vital, cuyo objeto no es otro distinto del de garantizar las condiciones materiales más elementales, sin las cuales la persona arriesga perecer y quedar convertida en ser que sucumbe ante la imposibilidad de asegurar autónomamente su propia subsistencia.

Con arreglo a los imperativos de la igualdad material, la Carta reconoce que si bien el derecho fundamental al mínimo vital es predicable de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, existen determinados sectores de la población que, en razón de su mayor vulnerabilidad, son susceptibles de encontrarse, con mayor facilidad, en situaciones que comprometan la efectividad de su derecho. De ahí que algunas normas de la C.P., consagran la obligación del Estado de otorgar una especial protección a los grupos más vulnerables de la población.

En otras palabras, la Constitución Política contempla una serie de sujetos necesitados de un “trato especial” en razón de su situación de debilidad manifiesta. El régimen de favor comprende a personas o colectivos indefensos que merecen una particular protección del Estado para que puedan desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los restantes miembros del conglomerado social, y no se vean reducidos, con grave menoscabo de su dignidad, a organismos disminuidos y oprimidos por las necesidades de orden más básico”¹⁴.

Pues en el caso que nos ocupa nos encontramos frente a un grupo de sujetos necesitados de “trato especial”, al haber sido retirados de las fuerzas militares por su condición de incapacidad severa, hecho que les generó haberseles reconocido la pensión por invalidez. Por lo tanto su mínimo vital no puede verse afectado por ninguna circunstancia.

Sin embargo el Ministerio de Defensa Nacional al desconocer los derechos que se reclaman en las peticiones que ocupan esta Litis, afecta el mínimo vital de los soldados profesionales que en razón al servicio se vieron enfrentados a asumir su nueva condición ante la sociedad.

Por lo anterior ruego a su señoría tener en cuenta la siguiente situación:

Mi representado devengaba en actividad un salario aproximado de \$ 1.533.723, equivalente a 2,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ingreso que le permitía responder con la satisfacción de las necesidades propias para él y su familia. Al encontrarse en ejercicio de sus labores propias de tropa y en combates directos con grupos al margen de la Ley, sufrió unas lesiones y secuelas que lo llevaron al retiro de la Institución Militar por Disminución de la Capacidad Psicofísica y en consecuencia obtener una pensión por invalidez debido a la incapacidad severa sufrida.

Esta nueva situación originó su imposibilidad de regreso a la vida laboral, debido a su condición de salud, por lo tanto el único ingreso que le permite su subsistencia y la de su familia es el reconocimiento económico realizado por el Ministerio de Defensa Nacional por concepto de Pensión por Invalidez.

Sin embargo debido a que su disminución de la capacidad laboral fue determinada en un 56.55%, le correspondió una pensión mensual de invalidez en cuantía equivalente al 50% de las siguientes partidas, según el Ministerio de Defensa Nacional:

Salario Mensual	\$ 965.236
Prima de Antigüedad	\$ 416.982
Subtotal	\$1.154.962
50% como pensión	\$ 577.481
Salario Mínimo 2015	\$ 689.454

¹⁴ Sentencia T-512 de 2009.

Pero de este total será reconocido únicamente el 50% debido a que su disminución física no supera el 75%, sin embargo al quedar el ingreso de la pensión por debajo de un salario mínimo mensual legal vigente, dicha prestación se incrementó a un salario mínimo legal.

Entonces mi representado subsiste al igual que su familia con el valor de un salario mínimo mensual legal vigente, suma muy diferente a los 2,4 SMLMV, que devengaba en actividad.

Así las cosas, al no obedecer lo dispuesto en la Ley y negarse el reconocimiento de la pensión de invalidez de mi poderdante tomando como base de liquidación la asignación básica establecida en el inciso segundo del artículo primero del decreto 1794 del 14 de Septiembre de 2000 (salario mínimo incrementado en un 60 % del mismo salario), como tampoco liquidar la pensión de invalidez estableciendo que al monto resultante de aplicar el porcentaje de pensión de invalidez a la asignación básica se le adicione el porcentaje de prima de antigüedad a que tiene derecho de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del decreto 4433 de 2004, el Ministerio de Defensa Nacional vulnera el **Mínimo Vital de Subsistencia del soldado profesional**, pues no le reconoce la suma que en verdad le corresponde como pensión de invalidez, más aún cuando esta es su único ingreso económico con el cual satisface sus necesidades básicas.

III. LA FALSA MOTIVACIÓN

Tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, han entendido que existe la ilegalidad denominada **FALSA MOTIVACION**, cuando los fundamentos alegados por el funcionario que expidió el acto administrativo, en realidad no hayan existido, o no tengan el carácter jurídico que el legislador les ha dado, es decir que se estructure la ilegalidad por inexistencia material o jurídica de los motivos de una parte, o que los motivos no sean de tal naturaleza que justifiquen la medida tomada.

En el caso que nos ocupa, se incurre en Falsa Motivación toda vez que los supuestos fácticos y jurídicos que sirven de fundamento a la administración en este caso Ministerio de Defensa Nacional, al expedir los actos administrativos, no obedecen a lo reglado en la norma Legal y Constitucional, por lo tanto no se justifica razonadamente su negativa frente a la petición. En este escrito demandatorio se justificaran los postulados normativos y de interpretación jurisprudencial y doctrinarios respecto del porcentaje en que debe incrementarse la pensión por invalidez de mi representado, los cuales han sido negados por la entidad demandada.

IV. PRECEDENTE JUDICIAL SOBRE LA LITIS RECLAMADA

- A. El Honorable Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrada ponente Lucy Jannette Bermudez Bermudez, en providencia del 17 de octubre de 2013, en FALLO DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA, radicado 2012 – 01189, actor Cecilio Cabezas Quiñones, En cuanto al derecho que le asiste a los soldados voluntarios que se acogieron a lo dispuesto en el decreto 1793 de 2000 y se incorporaron como soldados profesionales, a que en la liquidación de su asignación mensual se le liquide tomando como asignación básica el salario mínimo incrementado en un 60% del mismo, de conformidad a lo

establecido en el párrafo del artículo 1° del decreto 1794 de 2000, fijo la siguiente posición jurisprudencial:

A folio 19 de la providencia la Sala Considera:

“Como ya se advirtió la Sala, una vez el tribunal transcribió las anteriores normas, construyó una argumentación tendiente a concluir que el actor estaba cobijado por el régimen de los soldados profesionales (decreto 1794 de 200) y que en esas condiciones contaba con beneficios que no tuvo como soldado voluntario, y que solo bajo la ley 131 de 1985 podía devengar un salario mínimo legal vigente incrementando en un sesenta por ciento (60%), cuando lo cierto es que el legislador extraordinario, en la norma inaplicada, estableció el régimen de transición para aquellos soldados que habían sido voluntarios y que posteriormente se incorporaran como soldados profesionales, y por ello previo que solo en ese evento, el salario que los últimos recibirían sería el de un salario mínimo mensual incrementado en un 60%, a diferencia de aquellos soldados que ingresaron a la institución sin que previamente hubiesen prestado sus servicios como soldados voluntarios, pues para ellos el pago sería de “un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario. Entonces, a diferencia de cómo lo considera el tribunal tutelado, el actor no estaba solicitando la aplicación de dos regímenes buscando beneficiarse con las mejores condiciones de cada uno de ellos, sino la observancia del régimen de transición previsto en la norma que le era aplicable, esto es el decreto 1794 de 2000.

Así las cosas, evidente para la Sala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección “C”, al proferir la sentencia del 24 de mayo de 2012, incurrió en la irregularidad de naturaleza sustantiva alegada por el tutelante, pues inaplico sin razón alguna, el inciso 2° del artículo 1° del decreto 1794 de 2000 en abierta contradicción con su propia argumentación según la cual dicha normativa regia por completo la situación del señor Cabezas Quiñones. (Negrilla y subrayado es nuestro)

En consecuencia, la Sala amparara los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del tutelante, dejara sin efectos la sentencia censurada Y le ordenara a la autoridad tutelada que profiera una nueva donde se tengan en cuenta los lineamientos de esta providencia, “

- B. El H. tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “F” Magistrada Ponente Dra. Luceny Rojas Conde, Radicado N° 2011 – 00108, actor Fabio Alberto Yanes Cantero, en sentencia del 14 de junio de 2012 en relación con la asignación básica que le corresponde a un soldado profesional fijo la siguiente jurisprudencia:

“De la lectura de este último aparte normativo, y del contenido remisorio del artículo 1° citado, la Sala estima que en el mismo se consagro una excepción relacionada con la asignación salarial de los soldados que a 31 de diciembre del año 2000, se encontraban vinculados como voluntarios en los términos de la ley 131 de 1985, la cual, les permite devengar un salario mínimo legal vigente incremente en un sesenta (60%), a diferencia del 40% establecido para los soldados profesionales en la referida disposición.

(....)

"Establecida la disminución que sufrió el salario del demandante, con ocasión de sus cambio de soldado voluntario a profesional, establecerá la Sala si dicha situación, en efecto contiene un vulneración a la disposición consagrada en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, que dispone que los soldados voluntarios que se encontraban vinculados con anterioridad en vigencia de la ley 131 de 1985, tiene derecho a una asignación mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.(Negrilla y subrayado es nuestro)

Una vez analizado el texto de la disposición que se estudia y que fue transcrita en procedencia, la Sala considera que la misma contiene un mandato claro el cual tiene como fundamento que sin perjuicio de que a los soldados voluntarios vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000 que pasen a incorporarse como soldados profesionales, se les aplique íntegramente lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000, este mismo decreto, en relación con la asignación salarial mensual establece de manera diáfana que los soldados que sufrieron esta tránsito de voluntarios a profesionales, se encuentran EXCEPTUADOS de lo que devengan el resto de soldados profesionales, y es así como se establece que estos deben devengar un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%) del mismo salario. (Negrilla y subrayado es nuestro)

Aunado a lo anterior, la Sala debe precisar que la anterior diferencia porcentual establecida para las asignaciones mensuales de los soldados voluntarios incorporados como profesionales y los demás soldados profesionales, tiene un contenido de garantía de la irrenunciabilidad a los beneficios laborales mínimos establecidos por la Constitución y especialmente por la ley 4 de 1992 que en su artículo 2°, literal a) estableció el respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales, así como la prohibición de desmejora en sus condiciones laborales, al momento de fijar el régimen salarial y prestacional.(Negrilla y subrayado es nuestro)

El anterior argumento está sustentado en el hecho de que la asignación mensual que percibían los soldados voluntarios con anterioridad a la expedición del Decreto 1794 de 2000, era el equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%, asignación que mantenida en el inciso 2° del artículo 1° de la norma citada, disposición que , se reitera, a juicio de esta Sala buscó garantizar que estos servidores de la Fuerza Pública continuaran devengando la asignación que les fue otorgada por la ley 131 de 1985; de manera que si se hubiera desconocido este mandato legal, sin perjuicio de la asignación inferior de los soldados profesionales, se habrían vulnerados los derechos adquiridos de los soldados voluntarios.

(...),

En este orden de ideas, se encuentra demostrado que el actor le fue reconocido su salario incrementado solo en un 40%, situación que resulta contraria a las garantías excepcionales que fueron consagradas en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, que dispone que tiene derecho que tiene derecho a una asignación mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%, aquel soldado que se encontraba vinculado como voluntario con anterioridad a la expedición del Decreto 1794 de 2000. (Negrilla y subrayado es nuestro)

De conformidad con lo expresado, esta corporación considera que en virtud de la incorporación del actor como soldado profesional, la entidad accionada ha debido dar aplicación a lo previsto en el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, sin desmejorar sus condiciones salariales preexistentes, situación que no ocurrió en el presente caso y que, al tratarse de una disminución en la asignación básica, incide en la liquidación de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales que percibía el demandante."

- C. El H. tribunal Administrativo de Sucre, Sala tercera de Decisión Oral, MP. Moisés Rodríguez Pérez, Expediente: 70-001-33-33-001-2013-00013-00, Actor: Armando Mulfor González. Decidió:

"Es claro de la lectura normativa en comento, que subsiste un trato especial de la norma a los soldados que a 31 de diciembre del año 2000, se encontraban vinculados al servicio militar, de acuerdo con la Ley 131 de 1985: esto es, como soldado voluntario; trato especial este, quien tiene su fundamento en el cambio de régimen al que serían sometidos los soldados vinculados hasta ese momento.

Así las cosas, como quiera que el señor Armando Guillermo Mulfor González, se encontraba en servicio activo como Infante Voluntario de la Armada Nacional, para el 31 de diciembre de 2000, es beneficio de dicha prerrogativa, dado que sus supuestos encuadran con los determinados en el canon referido. Por lo que tiene derecho a que se le liquide su asignación de retiro, con el salario que debió percibir en forma correcta, como asignación mensual, es decir, un 1 SMLV más el 60% y esto es lo que debe servir como base, para liquidar la asignación antes mencionada".

Así mismo se reconoce la reliquidación de la **prima de antigüedad** tal y como se reclama en la presente Litis.

SUBSIDIO FAMILIAR

1. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "B" CONSEJERO PONENTE: DOCTOR GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN del diecisiete (10) de Julio de dos mil Catorce (2014). REF: EXPEDIENTE No AC – 11001-03-15-000-2014-01272-00, ACTOR: RAÚL MUSSE PUNCUE.
2. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "B" CONSEJERO PONENTE: DOCTORA BERTHA LUCIA RAMÍREZ DE PAZ del diecisiete (17) de Octubre de dos mil trece (2013). REF: EXPEDIENTE No AC – 11001-03-15-00-2013-01821-00, ACTOR: JOSÉ NARCES LÓPEZ BERMÚDEZ.

3. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, providencia del 07 de Julio de 2014, promulgada por la Sección Segunda, radicado 2012 – 00166, actor HERNANDO FLÓREZ ZAPE, Magistrado Ponente Dr. JAIME ALBERTO GALEANO GARZÓN.
4. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, providencia del 25 de Abril de 2014, promulgada por la Sección Segunda, radicado 2013 – 00038, actor EDUARDO SANTOS BRÍÑEZ, Magistrado Ponente Dr. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS.
5. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, providencia del 08 de Abril de 2014, promulgada por la Sección Segunda, radicado 2011 – 00053, actor LUIS ALFREDO CORREA MALATESTA, Magistrado Ponente Dr. ÁLVARO JAVIER GONZÁLEZ BOCANEGRA.
6. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL BOYACÁ, providencia del 13 de Junio de 2014, promulgada por la Sección Segunda, radicado 2013 – 00133, actor CARLOS HERNANDO VARGAS CAMARGO, Magistrado Ponente Dr. JAVIER ORTIZ DEL VALLE.
7. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, providencia del 03 de Abril de 2014, promulgada por la Sección Segunda – Subsección “D”, radicado 2013 – 00042, actor CARLOS JULIO RODRÍGUEZ LARA, Magistrada Ponente Dra. YOLANDA GARCÍA DE CARVAJALINO.
8. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, providencia del 10 de Septiembre de 2013, promulgada por la Sección Segunda – Subsección “E”, radicado 2011 – 00515, actor URBANO LEON RUBIO, Magistrada Ponente Dra. LILIA APARICIO MILLAN.
9. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ, providencia del 29 de Agosto de 2013, promulgada por la Sección Segunda, radicado 2012 – 00042, actor HERMES CUPITRA OVIEDO, Magistrado Ponente Dr. CARLOS ALBERTO PONTILLA RUBIO.
10. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, providencia del 12 de abril de 2012, promulgada por la Sección Segunda – Subsección “A”, radicado 2011 – 00080, actor JOSE ALEXANDER FONSECA BAUTISTA, Magistrado Ponente Dr. LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA.
11. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, providencia del 09 de noviembre de 2011, promulgada por la Sección Segunda – Subsección “E”, Sala de Descongestión, radicado 2006 – 00117, actor JOSE BENILDO PAEZ CASTELLANOS, Magistrado Ponente Dra. FANNY CONTRERAS ESPINOSA.

Podemos aseverar que hoy en día existe una línea jurisprudencial desarrollada por los Jueces, Tribunales de lo Contencioso Administrativo, así como en las altas Cortes, Consejo de Estado y Corte Constitucional frente al reconocimiento de las pretensiones que se solicitan en la presente Litis.¹⁵

1- ¹⁵ Fallo de segunda instancia promulgado por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “A” Radicado N° 2010 – 00523, Actor Oscar Hernando Zarate Beltrán, sentencia del 14 de junio de 2012, Magistrado Ponente Luis Ernesto Arciniega Triana. 2- Fallo de segunda instancia promulgado por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “F” Radicado N° 2010 – 00280, Actor Juan Carlos Pelufo Sotomayor, sentencia del 19 de junio de 2012, Magistrado Ponente Martha Jeannette González Gutiérrez. 3- Fallo de segunda instancia promulgado por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “F” Radicado N° 2010 – 00431, Actor Luis

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, Sala de decisión No. 2, febrero 06 de 2015, MP. Luis Ernesto Arciniegas Triana, Dte: Pedro Jaimes Maldonado, No. Proceso: 150013333008-2013-00012-01:

"...De lo anterior, fluye con evidente claridad que durante su servicio activo el señor Pedro Erasmo Jaimes Maldonado recibió como asignación básica un (1) salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) y no como lo dispuesto el inciso 2° del art 1 del decreto 1794 de 2000 un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta (60%), para quienes a 31 de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985.

En ese orden de ideas, esta Corporación desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, toda vez que, de acuerdo con el marco jurídico antes estudiado, y de cara a los elementos probatorios allegados al plenario, surge con claridad el derecho que asiste al señor Pedro Erasmo Jaimes Maldonado a reajuste de la asignación básica mensual devengada durante su servicio activo, y en consecuencia la reliquidación de sus prestaciones sociales, dese el 13 de septiembre de 2007 por el fenómeno de prescripción, y hasta el 29 de agosto de 2011 fecha de retiro del actor".

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN QUINTA- CP. LUCY JEANNETTE BERMUDEZ, Radicación No. 11001-03-15-000-2014-02433-01, Tutela contra el Tribunal de Casanare, Tutelante: Nelson González Jaimes:

"El accionante alegó que el Tribunal en la providencia censurada afirmó que a él le aplicaba íntegramente el Decreto 1794 de 2000, concluir que el actor estaba cobijado por el régimen del soldados profesionales (Decretos 1793 y 1794 de 2000) y que en esas condiciones contaba con beneficios que no tuvo como soldado voluntario, y que solo bajo la Ley 131 de 1985 podía devengar un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%), cuando lo cierto es que el Legislador extraordinario, en la norma aplicada, estableció el régimen de transición para aquellos soldados que habían sido voluntarios y que posteriormente se incorporaran como profesionales, y por ello previó que solo en ese evento, el salario que los últimos recibirían sería el de un salario mínimo mensual incrementado en un 60%, a diferencia de aquellos soldados que ingresaron a la institución sin que previamente hubiesen prestados sus servicios como voluntarios, pues para

¹⁵ Fallo de segunda instancia promulgado por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección "A" Radicado N° 2010 – 00523, Actor Oscar Hernando Zarate Beltrán, sentencia del 14 de junio de 2012, Magistrado Ponente Luis Ernesto Arciniegas Triana. 2- Fallo de segunda instancia promulgado por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección "F" Radicado N° 2010 – 00280, Actor Juan Carlos Pelufo Sotomayor, sentencia del 19 de junio de 2012, Magistrado Ponente Martha Jeannette González Gutiérrez. 3- Fallo de segunda instancia promulgado por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección "F" Radicado N° 2010 – 00431, Actor Luis Antonio Sosa Galvis, sentencia del 24 de abril de 2012, Magistrado Ponente Luceny Rojas Conde. 4- Fallo de segunda instancia promulgado por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección "F" Radicado N° 2010 – 00431, Actor John Jairo Gómez Peña, sentencia del 24 de abril de 2012, Magistrado Ponente Luceny Rojas Conde. 5- Fallo de segunda instancia promulgado por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección "F" Radicado N° 2010 – 00421, Actor Jairo Lineros Saldaña, sentencia del 25 de junio de 2012, Magistrado Ponente Luceny Rojas Conde.

ellos el pago sería de "un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario".

Entonces, a diferencia de cómo lo consideró el Tribunal tutelado, el actor no estaba solicitando la aplicación de los regímenes buscando beneficiarse con las mejores condiciones de cada uno de ellos, sino la observancia del régimen de transición previsto en la norma que él era aplicable, esto es, el Decreto 1794 de 2000.

Así las cosas, evidente para la Sala es que el Tribunal Administrativo de Casanare, al proferir la sentencia de 10 de julio de 2014, incurrió en irregularidad de naturaleza sustantiva alegada, pues inaplicó sin razón alguna el inciso 2º del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 en abierta contradicción con su propia argumentación según la cual dicha normatividad regía por completo la situación del Señor Gerardo Chacón"

V. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA

De conformidad con el artículo **157** del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo la cuantía de petición se tasa por valor de **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTE NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$28.993.224) M/CTE** (Sin indexación), esta cuantía resulta del análisis comparativo de la mesada pensional recibida en cada uno de los años por mi poderdante, en comparación con la que debió recibir, si la pensión de invalidez de los **últimos tres años**, se hubiese liquidado con la partida computable del subsidio familiar y la correcta liquidación de la prima de antigüedad.

Con el fin de ilustrar en mejor forma al Señor Juez, a continuación se presenta las siguientes tablas:

FORMA INCORRECTA DE LIQUIDACION					
Año	Sueldo Básico (1 SMLV + 40%)	Prima de Antigüedad en Actividad	Prima de Antigüedad como Pensionado	sumatoria del 2+4	Pensión Invalidez
		58,50%	38,50%		50,00%
2008	646.100	377.969	145.518	791.618	395.809
2009	695.660	406.961	156.680	852.340	426.170
2010	721.000	421.785	162.387	883.387	441.694
2011	749.840	438.656	168.883	918.723	459.361
2012	793.380	464.127	178.689	972.069	486.035
2013	825.300	482.801	185.878	1.011.178	505.589
2014	862.400	504.504	194.234	1.056.634	528.317
2015	902.090	527.723	203.173	1.105.263	552.632
2016	965.236	564.663	217.395	1.182.631	591.315

En el cuadro anterior podemos visualizar como actualmente el Ministerio de Defensa Nacional está reconociendo la pensión de invalidez

Explicación de la tabla:

- Primera columna: Contiene los años reclamos en la demanda.
- Segunda columna: Corresponde a la asignación básica fijada para mi poderdante en el respectivo año.
- Tercera columna: Valor de la Prima de Antigüedad establecida en el artículo

2° del Decreto 1794 del 2000.

- Cuarta columna: Valor de la Prima de Antigüedad establecida en el artículo 18° del Decreto 4433 del 2004.
- Quinta columna: Valor de la sumatoria de la segunda y cuarta columna
- Sexta columna: Valor resultante al aplicar el porcentaje de invalidez (Pensión).

FORMA CORRECTA DE LIQUIDACION						
Año	Sueldo Básico (1 SMLV + 40%)	% PENSION INVALIDEZ	Prima de Antigüedad como Pensionado	sumatoria del 2+4	Subsidio Familiar	PENSION ESPERADA
	40%	50,00%	38,50%		43%	
2008	646.100	323.050	124.374	447.424	190.155	637.580
2009	695.660	347.830	133.915	481.745	204.741	686.486
2010	721.000	360.500	138.793	499.293	212.199	711.492
2011	749.840	374.920	144.344	519.264	220.687	739.951
2012	793.380	396.690	152.726	549.416	233.502	782.917
2013	825.300	412.650	158.870	571.520	242.896	814.416
2014	862.400	431.200	166.012	597.212	253.815	851.027
2015	902.090	451.045	173.652	624.697	265.496	890.194
2016	965.236	482.618	185.808	668.426	284.081	952.507

Explicación de la tabla:

- Primera columna: Contiene los años reclamos en la demanda.
- Segunda columna: Corresponde a la asignación básica establecido en el inciso segundo del artículo 1° del decreto 1794 del 14 de Septiembre de 2000 (salario mínimo incrementado en un 40 % del mismo salario
- Tercera columna: Valor aplicado el porcentaje de pensión de invalidez al sueldo básico.
- Cuarta columna: Valor de la Prima de Antigüedad establecida en el artículo 18° del Decreto 4433 del 2004.
- Quinta Columna: Valor de la sumatoria de las columnas segunda y cuarta.
- Sexta Columna: Valor resultante al aplicar el porcentaje de subsidio familiar establecido en el Decreto 3770 del 30 de Septiembre del 2009.
- Séptima Columna: Valor de la sumatoria de la tercera, cuarta y quinta columna que es la pensión esperada.

CUADRO COMPATATIVO					
AÑOS	PENSION PAGADA	PENSION ESPERADA	DIFERENCIA MENSUAL	MESADAS	ANUAL
2008	461.500	637.580	176.080	14	2.465.114
2009	496.900	686.486	189.586	14	2.654.204
2010	515.000	711.492	196.492	14	2.750.885
2011	535.600	739.951	204.351	14	2.860.921
2012	566.700	782.917	216.217	14	3.027.042
2013	589.500	814.416	224.916	14	3.148.829
2014	616.000	851.027	235.027	14	3.290.379
2015	644.350	890.194	245.844	14	3.441.812
2016	689.454	952.507	263.053	1	263.053

ACUMULADO

10.144.073

Explicación de la tabla:

- Primera columna: Relación de los años en reclamación.
- Segunda columna: Corresponde a la pensión que le fue cancelada a mi poderdante en el respectivo año.
- Tercera columna: Corresponde a la pensión que debió ser cancelada a mi poderdante en el respectivo año.
- Cuarta columna: Diferencia mensual entre la pensión pagada y la pensión esperada
- Quinta columna: Número de mesadas recibidas en el respectivo año
- Sexta columna: la sumatoria anual de la diferencia que resulta entre la pensión pagada y la esperada.

X. COMPETENCIA

Son los Jueces Administrativos del Circuito Judicial de CALI, los competentes para conocer de este asunto en primera instancia por la cuantía, naturaleza y por factor territorial del asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 155, 156 y 157 del CPACA, por cuanto el señor JAMES CACERES MUÑOZ, en razón a que la última unidad donde prestó servicios fue en BATALLON DE ARTILLERIA N°3 BATALLON DE PALACE, ubicado en BUGA VALLE DEL CAUCA.

XI. PRUEBAS Y ANEXOS

Solicito que se tengan como pruebas, la documentación aportada con la demanda.

1. Poder legalmente conferido para actuar en vía contenciosa.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del soldado profesional JAMES CACERES MUÑOZ.
3. Memorial contentivo del derecho de petición elevado ante la entidad demandada radicado el 25 de JUNIO de 2015 Y 27 DE JULIO DE 2015.
4. Actos Administrativos N°OFI15-55400 MDNSGDAGPSAT del 14 de Julio de 2015 y N°OFI15-63920 MDNSGDAGPSAP del 13 de Agosto del 2015, emitido por el MINISTERIO DE DEFENSA en respuesta del Derecho de Petición motivo de esta litis, con el cual se agotó actuación ante la administración.
5. Copia del acta de conciliación N°308770 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015, mediante la cual se da cumplimiento al requisito de procedibilidad de que trata el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.
6. Copia auténtica de la Resolución N°1661 de 26 De ABRIL de 2012, mediante la cual se le reconoce la asignación de retiro al soldado profesional JAMES CACERES MUÑOZ.
7. Constancia de la última unidad laboral en la cual trabajó el Soldado Profesional.
8. Solicito respetuosamente a ese despacho que en el evento de faltar alguna **constancia, certificación o notificación** que se considere necesaria para el estudio de la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el CPACA se ordene a la demandada allegarlos en su oportunidad.

- 44
9. Copias de la demanda con sus respectivos anexos para: Archivo, Traslado a la entidad demandada, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y una para el Ministerio Público.

XII. NOTIFICACIONES

DEMANDADA: El Ministerio de Defensa Nacional ubicado en la Carrera 54 No. 26-25 CAN, Teléfono 3150111, correo electrónico notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co

DEMANDANTE: Mi poderdante las recibirá en la CALLE 32 A # 12-10 EN BUGA.

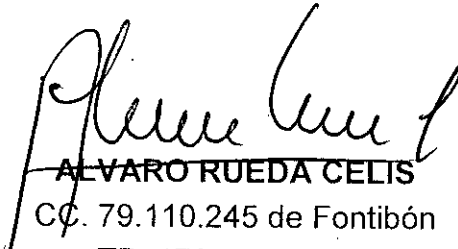
MINISTERIO PÚBLICO: El señor Procurador delegado ante ese Honorable despacho, puede ser notificado en la secretaría de esa Corporación o en la Carrera. 5 No. 19 -34 Oficina 702 de la ciudad de Bogotá. Procjudadm207@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, las recibirá en la calle 70 N° 4 -60 int. 312, teléfono 2558957 ext 303, 305 de la ciudad de Bogotá, email: procesos@defensajuridica.gov.co.

EL SUSCRITO APODERADO: Las recibiré en la secretaría de su despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la calle 28 No. 13 A 24 oficina 507. Teléfono 6508207 ext.104

De conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, acepto que las notificaciones del presente proceso se hagan as través del siguiente correo electrónico email: alvarorueda@arcabogados.com.co

Del Señor Juez,


ALVARO RUEDA CELIS
C.C. 79.110.245 de Fontibón
TP. 170.560 HCSJ.